

# EL DERECHO A LA UNIVERSIDAD EN JAQUE

## IMPACTO DEL AJUSTE EN LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN UNIVERSITARIA

### IEC- CONADU

INFORME DE LUCAS PETERSEN

El ajuste en las políticas sociales y educativas implementado por el Gobierno nacional y el deterioro de la situación socioeconómica ya se están haciendo sentir en las aulas universitarias. Las casas de estudios sufren los problemas financieros derivados de un presupuesto atrasado en relación con la inflación, subejecutado, liquidado de manera demorada o tensionado por la suspensión de distintos programas y contratos que el Estado tenía con las instituciones por fuera de las partidas específicas.

Los estudiantes se ven especialmente afectados por la restricción en las becas con las que

miles de ellos garantizaban su asistencia a clases, en un contexto, además, de sensible deterioro de la situación socioeconómica. Esta herramienta de inclusión universitaria se encuentra virtualmente desarticulada y también lo están otros programas, como las ayudas a estudiantes discapacitados, el Programa de Acción Complementaria y demás iniciativas que apuntaban a mejorar la enseñanza de los primeros años.

Las nuevas escuelas secundarias dependientes de universidades, creadas por el Ministerio de Educación desde 2014, constituyen uno de los segmentos más débiles del sistema universitario. Estos establecimientos, que se ubican en los barrios más postergados con la intención de configurar espacios educativos de

alta calidad que, además, consideren de manera flexible las trayectorias y los contextos de exclusión de gran parte de sus estudiantes, quedaron o bien paralizados o bien profundamente trastornados en sus proyectos originales por los recortes.

## CADA VEZ MENOS BECAS

Tanto las becas universitarias como el Plan Progresar vienen sufriendo una práctica habitual de recorte en los primeros dos años de gobierno macrista: “No suspenden los programas, pero los vacían de hecho”, resume Julián Fava, subsecretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Con él coincide Patricia Alí, coordinadora de la Unidad de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), de Florencio Varela: “Van reduciendo los aportes, o suben requisitos y dificultan los accesos”.

“Nosotros veníamos de un período en el que las becas eran, básicamente, un factor que contribuía a garantizar el derecho de los estudiantes a permanecer en las carreras, pero ya a partir del año pasado, y sobre todo, de este año, empezamos a mirar con preocupación que aparecieran nuevos mecanismos para aplicar a las becas y, sobre todo, para mantenerlas. Estas lógicas de recorte no son anunciadas. Nos enteramos de hecho, cuando empiezan a aparecer las situaciones de estudiantes que reciben la noticia de que tienen una baja en la beca. En muchos casos, esas becas, a diferencia a lo que ocurría hace algunos años, son esenciales para mantenerse en la facultad y no un complemento a otro ingreso o a la ayuda de las familias. Estamos viendo con mucha preocupación esto”, explica Martín Legarralde, prosecretario de Vinculación Educativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la Universidad de La Plata.

El Plan Progresar, que es el principal programa de becas a nivel nacional, destinado a jóvenes de 18 a 24 años, está prácticamente paralizado en el nivel universitario. El año pasado había mostrado problemas, cuando no se actualizaron los 900 pesos del monto que siguen rigiendo hasta hoy. Según un informe del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), de la Facul-

tad de Sociales de la UBA, esto significa que el poder de compra se redujo casi a la mitad con relación a dos años atrás. Cuando en el Presupuesto 2017 se estableció una reducción del 30% del monto asignado, se preveía que este año los inconvenientes serían mayores. En marzo se produjo una caída de las prestaciones del 28% en comparación con fines de 2016, es decir, de casi un millón a menos de 720 mil jóvenes. A principios de año suele haber una reducción “estacional”, ya que el plan exige la aprobación de al menos dos materias por año. Pero, según pone de relieve el trabajo, la reducción es la más alta desde la creación del programa (en 2016 fue de 22%) y afectó incluso a aquellos que cumplían

“

LOS ESTUDIANTES SE  
VEN ESPECIALMENTE  
AFECTADOS POR LA  
RESTRICCIÓN EN  
LAS BECAS CON LAS  
QUE MILES DE ELLOS  
GARANTIZABAN SU  
ASISTENCIA A CLASES.

”

con los requisitos académicos. Por esta razón, las mesas de recepción de Bienestar Estudiantil de las universidades se llenaron este año de planteos sobre el Progresar. La Anses asegura que está revisando caso por caso los informes académicos de los beneficiarios, pero lo cierto es que no está muy claro con qué criterios suspendió, dio de baja o demoró pagos. Fava asegura que las universidades cumplieron en tiempo y forma con la presentación de la situación académica de los beneficiarios: “Pero no hay de parte de la Anses una respuesta. Te dicen que van a analizar caso por caso, pero lo concreto es que la mayor parte de los estudiantes está sin cobrar. Hay opacidad y también desaliento. Cuando vienen aquí, los estudiantes nos dicen ‘me dijeron en la Anses que

la universidad no informó acerca de mi situación académica’ y la universidad informó”.

Legarralde coincide en las consecuencias de la falta de información: “Nos deja pocas herramientas para anticipar, ayudar o colaborar en esas situaciones”. Reconoce que antes tampoco tenían mucha intervención, pero que entonces “tampoco aparecía como un problema”. El funcionario de la FaHCE resalta que no siempre se tiene en cuenta que muchos estudiantes becados, cuando cursan su primer año, no tienen una idea certera de qué significa aprobar las dos materias requeridas. Y que tampoco el Estado se preocupa de dejarlo en claro. “Van cursando, aprobando cursadas, pero postergando los primeros exámenes finales, descontando que van a continuar con la beca. De golpe se enteran de que se les interrumpe porque no tenían los finales. Eso complica a los propios estudiantes, porque no estaba claro desde el principio. No hay fluidos canales de colaboración con la universidad para poder anticipar esta situación”. La Anses informó a comienzos de julio que se pagaron de manera retroactiva algunos de los casos los casos que habían sido suspendidos por supuesta falta de información y habilitó “la vía de reclamo individual” para aquellos que no hubieran sido aún rectificadas. “Nosotros tenemos una alta demanda con el Progresar —explica Patricia Alí—. El año pasado llegamos a tener 3900 estudiantes con esa beca. Pero este año hubo una reducción importante, aunque todavía no tuvimos acceso a los datos. Antes teníamos informes constantes, hasta mensuales, pero ahora el Ministerio no nos pasa la información”.

El caso de las Becas Universitarias y las Becas Bicentenario, provistas por el Ministerio de Educación, es ligeramente distinto aunque con resultados similares. La cartera optó por aumentar los requisitos académicos. Tanto antes como ahora, el requisito de primer año es la mera inscripción. Pero el cambio se produjo para el segundo y el tercer año. Si antes había que aprobar dos materias de primero para tener la beca en segundo, ahora se requiere el 50% del plan de estudios, que puede elevar el número a cuatro materias. Para continuar la beca en el tercero, hay que tener el 50% de las materias de primer año y el 50% de las de segundo. Siempre, además, exige la aprobación de dos materias durante año anterior (lo que ya de por sí deja afuera a quien

debió suspender su cursada por alguna razón). Y si el estudiante se retrasa en finalizar su carrera más de dos años de lo que está pautado, también queda afuera del sistema.

Dichos requisitos, por el sistema de correlatividades y por los condicionamientos que pueden imponer las situaciones personales, terminarán raleando el acceso a las ayudas, que rondan los 1700 pesos. A esto se sumó, en 2016, que la convocatoria se realizó muy tarde en el año y cerró a fines de marzo, lo que implicó dificultades incluso para aquellos que terminaron obteniéndola. “Para estudiantes que trabajan, que son padres o que vienen de sectores populares es un requisito demasiado alto, cosa que antes no era así. Había un requisito académico, pero era más acorde a lo que podía rendir un estudiante que viniera de una familia que necesita una ayuda económica. Esto hace que directamente no puedan aplicar. Después, cuando llegan a cumplir el requisito, se pueden volver a inscribir, pero mientras tanto se quedaron todo el cuatrimestre sin la ayuda”, explica Ali. En cuanto a las ayudas estatales, Patricia Ali enumera tres situaciones más que están condicionando el acceso a la educación superior: la ayuda a estudiantes discapacitados, la del Programa de Acción Complementaria y la del boleto estudiantil. “En el programa de ayuda a discapacitados todavía estamos con la presentación que hicimos en 2015, que se depositó, si mal no recuerdo, a fines del año pasado. Este año no hay una nueva convocatoria. Además, antes se le entregaba una computadora con todos los programas. Ya el año pasado no se repartieron y este año no hay horizonte de que se repartan. El Programa de Acción Complementaria es importante para las universidades porque nos permite generar dispositivos alternativos. Este dinero es para ayudar a los estudiantes que reciben becas nacionales. No va directo al estudiante sino que es para comprar equipamiento, para capacitación docente; nosotros implementamos el programa de tutores pares (estudiantes avanzados que acompañan a estudiantes con dificultades). Este año la reducción presupuestaria fue fenomenal, de un 60% en términos nominales sin contar con la inflación que hubo, y además quedó excluida la posibilidad de comprar equipamiento”.

Ali llama la atención también sobre la limitación del boleto estudiantil dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: “Tu-

vimos una demanda para el primer llamado de 7700 estudiantes, y una gran cantidad de ellos fue rechazada. El boleto estudiantil, que dicen que es universal, no lo es porque implica requisitos, como por ejemplo, tener dos materias aprobadas del año anterior y una materia del último cuatrimestre, y vivir a más de veinte cuadras de la universidad. ¿El que vive a quince cuadras no puede tener una ayuda al transporte? A veces te pasa que vivís a menos de veinte cuadras y tenés que tomarte dos transportes. La ley original, efectivamente, era abarcativa, pero lo que hicieron cuando la reglamentaron fue apuntar a dár-sela a pocos”.

“

## LAS NUEVAS ESCUELAS SECUNDARIAS DEPENDIENTES DE UNIVERSIDADES QUEDARON O BIEN PARALIZADAS O BIEN PROFUNDAMENTE TRASTORNADAS EN SUS PROYECTOS ORIGINALES POR LOS RECORTES.

”

### **LAS UNIVERSIDADES ASUMEN EL PROBLEMA**

Ante las dificultades que se empezaron a producir en la continuidad de los programas de inclusión, las propias universidades debieron responder con sus propios recursos (objeto, a su vez, de recortes). El principal de ellos fue el aumento de las becas que brindan las propias instituciones.

La Universidad de San Juan tiene un sistema llamado Becas de Apoyo al Desempeño Académico. Son varias líneas: becas de comedor; de prestación de servicios (que se reciben a cambio de un trabajo de perfil académico que se realiza dentro de alguna cátedra), de transporte, de

fotocopias y también una beca de emergencia cuando se produce alguna contingencia inesperada fuera la época de cursada. “Nosotros, este año, estamos aproximadamente en un 25% más de chicos becados respecto del año pasado. Creo que la situación económica impacta directamente en eso”, relata Alfredo Daroni, secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan. Para garantizar esa respuesta, asegura el funcionario, la UNSJ eligió priorizar la ayuda a los estudiantes por sobre cualquier otra erogación. “La universidad, más allá de los problemas económicos que pueda tener, ha atendido de manera prioritaria el tema de las becas. El actual rector está desde el año 2012 y desde ese momento hemos aumentado el 350% el presupuesto de becas. En lo que respecta a las becas del comedor, para las que tenemos un presupuesto aparte, hacemos un cálculo para el año siguiente en función de la inflación, vamos al Consejo Superior con ese presupuesto y, con buen tino, la universidad tratará de hacer ajustes por otro lado, pero las becas de los alumnos no las achica, así que estamos pudiendo atender toda la demanda”.

El mismo cuadro muestra la Universidad de Quilmes, según relata su secretario académico, Daniel Filman: “La universidad tomó la decisión este año de incrementar la inversión en becas y acompañamiento socioeconómico a los alumnos. Fue la única partida que la universidad decidió incrementar por sobre el resto de las partidas y eso, por supuesto, fue en detrimento de otras actividades de la universidad, incluso actividades sustantivas como la investigación, la extensión o la docencia”. En el caso del comedor, el directivo resalta que registraron un aumento de los menús estudiantiles que subvenciona la universidad.

En la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UBA, el año pasado hubo 1056 alumnos becados. De ellos, 625 tenían Progresar; 239, becas universitarias; 69, becas Sarmiento (que otorga la UBA) y 123, becas de fondos propios. Este año, si bien los datos definitivos no están disponibles por la falta de información de los primeros dos ítems, la Facultad debió aportar 176 becas, un 43% más. “Prácticamente se les da a todos los estudiantes que se presentan”, afirma Julián Fava. La FFyL tiene también, desde hace veinte años, el Programa de Orientación y Acompañamiento a los Estu-

diantes, que aborda las trabas que se producen en la permanencia y el egreso de los estudiantes por múltiples razones, como pueden ser el embarazo, la maternidad/paternidad, la enfermedad de un familiar a cargo, las dificultades pedagógicas o las dudas frente a la carrera elegida. Dentro de este programa se ubica el Régimen de Prórrogas Extraordinarias, que evalúa los pedidos de extensión de la regularidad para poder rendir las materias que quedaron pendientes para recibirse, además de acompañar ese proceso. En 2016 se atendieron 1021 casos y fueron aprobados, tras entrevistas personales con cada estudiante, 963 prórrogas.

En el caso de Humanidades de La Plata, el recorte hizo mella en una política que venía en crecimiento, la de mejorar la enseñanza en los primeros años de la carrera, cuando se produce la mayor tasa de expulsión de estudiantes. “Había toda una línea de trabajo que se venía pensando que incluía capacitación de docentes e investigación sobre las cátedras de primer año. Pero esto dependía muy directamente de que haya algún tipo de programa que los apunte. En algún momento se venía discutiendo entre las universidades, el gremio y el Ministerio, pero eso se interrumpió. La Facultad hace mucho esfuerzo para cubrirlo, pero para dar un salto cualitativo se requeriría un programa específico de los que en algún momento se habían abierto a la discusión”, explica Legarralde. Lo que resultó llamativo a Fava fue la incidencia que comenzó a tener la situación económica en el pedido de esas extensiones: “El tema recurrente es la dificultad económica a la hora de viajar a la facultad, de comprar los apuntes, o bien porque ellos o algún familiar se quedaron sin trabajo, o bien porque no les alcanza y tienen que trabajar más horas. Aparece de un modo muy presente, como no aparecía antes”. Legarralde coincide: “Recibís, como no recibías desde años atrás, comentarios muy precisos sobre dificultades económicas que impactan sobre la condición del estudiante. Por ejemplo, cuánta bibliografía tienen que comprar o cuántas veces tienen que venir a la facultad. Hoy encontrás estos planteos como condición de permanencia”.

A diferencia de universidades más antiguas, la UNAJ, creada en 2012, pese a recibir a una población con mayores dificultades económicas, no cuenta con una espalda presupuestaria para hacer frente por su propia cuenta. En buena medida, porque requiere mayor presupuesto para

completar las obras de infraestructura o incluso pagar a los docentes que reciben el progresivo aumento de la matrícula. “A las universidades del Conurbano nos está pasando eso. Da la impresión de que molesta que los sectores populares accedan a la universidad. Estas son las universidades que más han sufrido retrasos o recortes. En el caso nuestro, como somos una universidad nueva, más necesitamos porque nosotros tenemos que construir aulas. Entonces, si no se acompaña ese crecimiento, se termina ahogando a la universidad”. Por esa razón, gran parte de las políticas de inclusión que desarrolla la Jauretche deben apoyarse necesariamente en programas nacionales: “Nosotros hacemos una fuerte promoción y asis-

“

**ESTAS LÓGICAS DE RECORTE  
NO SON ANUNCIADAS: NOS  
ENTERAMOS DE HECHO,  
CUANDO EMPIEZAN A  
APARECER ESTUDIANTES  
QUE RECIBEN LA NOTICIA  
DE QUE TIENEN UNA BAJA EN  
LA BECA.**

”

tencia para que los estudiantes puedan aplicar a esas becas”, explica Alí. Pero eso la hace más sensible al ajuste a nivel nacional y provincial. Con arcas propias, apenas puede ofrecer “una pequeña ayuda para padres y madres de chiquitos de entre 45 días y tres años, para la niñera o el pago del jardín maternal. No pudimos ampliar la cantidad de becas, pero intentamos atender toda la demanda. Después hay otro tipo de ayuda que es que los libros que imprime la editorial de la universidad se les entregan en forma gratuita a los que tienen beca”. El recorte condujo a la desaparición de varios programas, como las salidas (“antes había financiamiento para acceder al Museo de la Memoria o a Tecnópolis”, recuerda Alí), o a la cancelación de proyectos, como la

intención de establecer ayudas por situaciones de violencia de género o becas de comedor. La situación en el territorio se hace sentir. La funcionaria menciona algunos casos que generaron preocupación: “Una docente de mi cátedra me dijo que una chica se le había puesto blanca y era que no había comido en todo el día, y era el turno noche”.

A medida que comiencen a ser procesados los números del cuatrimestre pasado, se empezará a detectar en términos numéricos la forma en que la crisis y el ajuste se metieron en el aula. Sin embargo, Fihman llama la atención sobre un hecho: “Estamos identificando un fenómeno parecido al momento de incremento de desempleo de los años noventa, vinculado al incremento en la cantidad de alumnos que deciden iniciar sus estudios porque no están en condiciones de acceder al empleo y aspiran a mejorar sus condiciones de empleabilidad a partir de la continuación de sus estudios. Todavía no tenemos elementos para poder diagnosticarlo totalmente, pero este año la universidad tuvo un aumento de la matrícula muy grande. Pero tenemos una alta deserción al poco tiempo, vinculada a no poder continuar por razones económicas y también al reconocimiento de que esa continuidad de estudio tampoco va a asegurar mayores condiciones de empleabilidad, en medio de una crisis del empleo”.

## CONCLUSIÓN

La forma velada en que el Gobierno nacional ha encarado las políticas de restricción de la inversión educativa y social, es decir, el proceso de “subejecución selectiva” de los presupuestos de esas áreas y el establecimiento de requisitos burocráticos que, en nombre del mérito y la eficacia, introducen silenciosamente obstáculos para el acceso a programas de apoyo, no solo vacía o desvirtúa el sentido de esas políticas de inclusión sino que está provocando una interrupción y reversión de la tendencia a la ampliación del derecho a la universidad que se vino verificando desde la década pasada.

De persistir esta tendencia, se visualiza en el horizonte de la nueva gestión una universidad pública que tendrá enormes dificultades para ampliarse a nuevos y postergados sectores sociales, y para sostener por su cuenta a los que, con el esfuerzo colectivo, pudo incorporar hasta hoy.

## ESCUELAS COMPROMETIDAS

En 2013, el Ministerio de Educación puso en marcha el proyecto de Nuevas Escuelas Secundarias Dependientes de Universidades Nacionales, una iniciativa que impulsaba la creación de colegios universitarios muy distintos a los tradicionales. En ellos, en lugar de apuntar a la formación de una élite, se procura alcanzar a los sectores más vulnerables de la sociedad para poner a su disposición una opción educativa técnica de alta calidad que tenga especial flexibilidad para abordar los complejos contextos en los que se insertan. En 2014, se abrieron las escuelas de las universidades de Quilmes (UNQ), Avellaneda (UNDAV) y San Martín (UNSAM). En 2015 se lanzaron los secundarios de la UBA y de General Sarmiento (UNGS). Un año después, nació la de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Algunas de estas escuelas están sufriendo de manera especialmente dramática el juego de pinzas entre el deterioro socioeconómico de la población que reciben y el deterioro presupuestario de las universidades de las que dependen. El caso más extremo es el de la UNAJ, que directamente no pudo poner en marcha la escuela secundaria que tenía prevista. Pero también entre las que están funcionando se siente el nuevo contexto.

La escuela de la UNQ está ubicada en Ezpeleta, una de las zonas más pobres del partido. Unos 350 alumnos cursan tres orientaciones: dos técnicas (Informática y Tecnología de los Alimentos) y un bachillerato con orientación en Comunicación. “El año pasado, El Ministerio de Educación nos giró la mitad del gasto en personal y en funcionamiento. No nos financia el comedor ni el personal de apoyo no docente. Pero al día de hoy, fines de julio, el Esta-

do no ha girado un peso de 2017. A pesar de eso, la universidad tomó la decisión de continuar con el proyecto”, detalla Daniel Fihman, secretario Académico de la UNQ. El financiamiento debería llegar a través de un contrato-programa. Según el directivo, en reuniones con el área técnica del Ministerio le manifestaron la intención de renovarlo, pero hasta el momento no se han ejecutado los fondos. Para Fihman, “eso da cuenta de una intencionalidad de producir cierto ahogo presupuestario, tironear hasta donde se pueda”. En un principio, el exministro Bullrich había confesado su intención de desarticular el programa y transferir las escuelas a las provincias, intención que por el momento no se ha concretado.

La escuela de la UNDAV tiene 137 alumnos y una orientación técnica en Maestro Mayor de Obras. Funciona cerca de la Villa Azul, un asentamiento que se extiende entre los municipios de Avellaneda y Quilmes. La idea original era la creación de una escuela de entre 800 y 1000 alumnos. Sin embargo, la restricción de fondos pone en suspenso el arribo a ese objetivo, ya que la construcción del edificio quedó a mitad de camino. “Estamos funcionando con una primera etapa incompleta desde el punto de vista edilicio, con un aula que está pensada como aula-taller y nos tres aulas que nos ceden en el Polideportivo que inauguró la Municipalidad de Avellaneda a fines de 2016”, detalla Claudia Escudero, vicedirectora de la escuela. Por otra parte, también quedó sin resolver la atención del comedor. “El proyecto inicial es con financiamiento del desayuno, el almuerzo y la merienda. Los chicos ingresan a las 8 y salen a las 17. El comedor existe gracias a la voluntad de los docentes y las donaciones que nos hacen. Por ahora no tiene otro tipo de financiamiento”. Lo mismo ocurrió con el transporte. Al atender una población de jóvenes que en muchos casos requieren una atención especial para poder reinsertarse en el sistema educativo, la escuela había dispuesto un micro para garantizar los traslados. “Ahora no se puede, por la

situación de desfinanciamiento. Entonces, como hay un servicio muy directo, la línea 159, nosotros gestionamos pases, nos hicimos cargo de las credenciales y de que tengan cargada la SUBE”, explica Escudero. La universidad también tomó a su cargo el programa de Coro y Orquesta, que al principio dependía del Ministerio de Educación. Esta compleja situación financiera se combina con el deterioro de los ingresos de las familias de los alumnos, en un contexto de ajuste general. “Las familias están pasándola muy mal ahora. Nosotros tenemos una ropería que se maneja con donaciones y también útiles que nos donan. Vamos acompañando de esa manera”, dice Escudero, que destaca también que la escuela tiene que hacer esfuerzos para asegurar la retención de los estudiantes, que implican pensar trayectos alternativos que favorezcan un mayor involucramiento o, incluso, ir a buscar a los chicos a la casa.

Lo que más llama la atención a Fihman, de la UNQ, es “el paulatino retiro del Estado, provincial y local, precisamente para aquellas familias que requieren mayor acompañamiento”. El municipio está desde 2015 a cargo de Martiniano Molina. “Lo hemos manifestado a las autoridades y las respuestas no ha sido acordes a la dificultad. No hay áreas de salud, las salitas están vacías de profesionales y de equipamiento, las áreas de contención de violencia familiar o drogadicción están en franca retirada o no dan respuesta a la enorme demanda que está habiendo. Es un problema para la escuela, porque nos vemos en la obligación de intervenir más”. En la escuela de la UNDAV, que recibe estudiantes de Avellaneda y también de Quilmes, destacan el apoyo del primer municipio, no solo porque ofreció el terreno en comodato sino también por la articulación que realizan con el Polideportivo Municipal que se inauguró en 2016 y por la apertura, este año, de un centro asistencial que permite atender muchas situaciones que anteriormente debían resolver en el Hospital de Wilde.